

Movimientos populares y luchas sociales en Uruguay

Carlos Moreira*

Resumen

En los últimos años, América Latina ha sido atravesada por el auge de las movilizaciones sociales donde actores de orientación contra hegemónicas buscan expresar sus intereses, demandas y objetivos. En ese contexto, Uruguay ha sido siempre un caso complejo para los analistas, dado que es una sociedad que prioriza la lucha política institucionalizada a través de los partidos políticos. Sin embargo, dentro de la vigencia de este esquema se observan algunas transformaciones. En este trabajo se aborda el pasado reciente y la actualidad de los movimientos sociales y populares en Uruguay, distinguiendo diferentes categorías dentro del fenómeno, a la vez que se identifican los conflictos y adversarios que cada tipo de movimientos sociales ha debido procesar, realizándose un balance provisorio tanto en términos de su situación actual como de las perspectivas de futuro. En términos metodológicos el trabajo se ha realizado a partir de las consultas de documentos, prensa y bibliografía, así como de la realización de entrevistas semi estructuradas a informantes calificados.

Palabras clave

Movimientos sociales. Luchas sociales. Uruguay.

Abstract

In recent years, Latin America has experienced the peak of social mobilizations, when actors with a counter-hegemonic discourse intend to express their interests, demands and objectives. In this context, Uruguay has always been a complex case for analysts, since it is a society that gives priority to the institutionalized political struggle through political parties. However, some changes are observed within this scheme. This study discuss the recent past and the present of social and people's movements in Uruguay, distinguishing different categories within the phenomenon, as well as identifies the conflicts and adversaries that each type of social movement had to face, performing a provisional evaluation both of the current situation and future perspectives. As for methodology, this study was based on research in

* Doctor en Ciencia Política pela Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ciudad de México/México). Profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Baja California (Baja California/México) y la Universidad Nacional de Lanús (Buenos Aires/Argentina). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI), nivel I. E-mail: cmoreira07@yahoo.com.

documents and the press and on bibliographical research, as well as on the performance of semi-structured interviews to qualified informants.

Keywords

Social movements. Social struggles. Uruguay.

A pesar de las políticas de asistencia social y negociación colectiva que se implementaron en Uruguay durante el gobierno del líder del Frente Amplio, el doctor Vázquez (2005-2010), a comienzos del 2007 fue posible visualizar algunos signos de quiebra del consenso social alcanzado, y para la segunda mitad de dicho gobierno diversos grupos y movimientos sociales se manifestaron públicamente y en forma masiva contra las políticas llevadas a cabo desde el Poder Ejecutivo. Con los resultados a la vista, sabemos que en materia electoral esto no representó ningún riesgo para el gobierno frenteamplista, ya que logró una mayoría ciudadana en las elecciones del 2009, pero sí vale la pena prestarle atención a los sucesos que marcaron la relación entre el Frente Amplio gobernante y los movimientos sociales. Y es que el gobierno progresista uruguayo que construyó con éxito el consenso inicial para la primera mitad de su gestión, se enfrentó a partir del 2007 a una primera coyuntura crítica, donde el cemento de los acuerdos fue puesto a prueba, y en algunos casos comenzó a resquebrajarse, dejando lugar a significativas polarizaciones sociales dentro de su bloque de apoyo (MOREIRA, 2010).

2007, el año de la furia

El 9 de marzo de 2007, una marcha multitudinaria, convocada para repudiar la presencia del presidente George Bush en el país, recorrió la avenida 18 de Julio de la ciudad de Montevideo. La consigna de la movilización fue *Con Artigas, por la Paz, la Unidad Latinoamericana y Contra el Imperialismo*, y los concurrentes en cifra cercana a los quince mil escucharon una proclama que evitó hacer críticas al gobierno. La central obrera Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) articuladora de la convocatoria, mantuvo de esta manera la posición de *apoyo*

crítico que asumiera desde la asunción del gobierno frenteamplista el 1° de marzo de 2005, otorgando con ello una carta de acción sin convertirse en un aliado incondicional del mismo. Ese día y por la misma Avenida 18 de Julio, aunque pocas cuadras más allá, se desarrolló otra marcha, convocada por la Coordinadora Antiimperialista, que definió claramente su posición en la lectura de la proclama: “Este gobierno ha profundizado la política de entrega que durante décadas impusieron la burguesía y la oligarquía criollas con el instrumento de los partidos tradicionales y hoy nos entregan sin ningún pudor, arrodillados, al yanqui ladrón”. Los grupos convocantes, desde partidos integrantes del Frente Amplio hasta organizaciones sociales, plantearon que el gobierno del Frente Amplio se había prestado a la estrategia de división de los pueblos que lleva a cabo el imperialismo, por lo que “contra este camino humillante, de genuflexión, de ruptura con los principios más caros de la izquierda y el movimiento popular, debemos marcar otro camino” (Semnario *Brecha*, 16/03/2007).

Si bien la concurrencia no llegó a igualar a la que participó en la marcha del PIT-CNT, cerca de diez mil personas concurren a la protesta que criticó tanto a Bush como a Tabaré Vázquez, y de esta manera, “los radicales pelearon cuerpo a cuerpo con los “institucionales” el primer puesto en concurrencia a las respectivas marchas” (CONTRERAS, Semnario *Brecha*, 16/03/2007). Esto demostró que si bien la importancia a nivel electoral de los grupos convocantes a la marcha radical podría ser menos significativa, a nivel de masas movilizadas dicho apoyo era importante, constituyéndose en “la primera manifestación callejera que enfrenta el gobierno progresista, la primera manifestación pública masiva de repudio y malestar ante sus políticas de Estado” (SEMPOL, Semnario *Brecha*, 16/03/2007).

Un mes y medio más tarde, el 29 de abril, se realizó la movilización ambientalista denominada *Un Abrazo al Río Uruguay*, que reunió a miles de personas en el lado argentino de dicho río, y que significó que decenas de manifestantes uruguayos y delegaciones de las localidades de Rocha, Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Soriano y Fray Bentos se sumaran al rechazo a la instalación de la pastera Botnia, lo cual no dejaba de ser un dato sorprendente frente al consenso mayoritario de apoyo explícito o tácito a la instalación de la multinacional finlandesa que existe en la sociedad y el sistema político uruguayo. Pocos días después, y ya en el terreno sindical, el 1° de mayo se realizaron dos actos paralelos y bajo diversas consignas con motivo del Día de los Trabajadores. En líneas generales se repitió la dicotomía marcada el 9 de marzo con las marchas de repudio a Bush: uno

de los actos fue convocado por el PIT-CNT como central obrera, el otro acto fue organizado por la Tendencia Clasista y Combativa, conglomerado minoritario de sindicatos de la misma organización. Mientras en el acto oficial del sindicalismo se volvió a desarrollar la ya mencionada postura de “apoyo crítico” al gobierno progresista, el segundo acto estuvo marcado por fuertes palabras hacía los dirigentes del PIT-CNT a quienes se calificó como “burócratas sindicales”, al tiempo que el discurso estuvo plagado de críticas a los lineamientos de acción del gobierno.

Esta secuencia de movilizaciones callejeras continuó en junio en ocasión del natalicio de José Artigas. Para el 19 el gobierno frenteamplista anunció su intención de convocar a la ciudadanía a la Plaza Independencia de Montevideo, para iniciar un proceso de reconciliación nacional bajo el lema “nunca más uruguayos contra uruguayos”. Pocos días antes del acto, el presidente Vázquez debió cambiar la consigna de su convocatoria por “nunca más al terrorismo de Estado”, antes las críticas recibidas desde diversos sectores de la izquierda uruguaya, especialmente el Partido Comunista del Uruguay. Al evento concurrieron la mayoría de la dirección del FA y la totalidad de los dirigentes de los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, este arco de dirigentes oficialistas y opositores no contó con el apoyo de las bases de la militancia frenteamplista, y sólo entre tres y cuatro mil personas se hicieron presentes para escuchar el discurso del Presidente. Más aún, ninguna organización de derechos humanos concurrió a la convocatoria oficial (*Diario Página 12*, 20/06/2007). Ese día y a pocas cuadras de allí, como en ocasiones anteriores, se manifestaron los que se oponían al acto oficialista, ahora en dos marchas distintas. Por un lado, los más próximos al gobierno con su postura de apoyo crítico, esta vez con la ausencia del PIT CNT, que se abstuvo de concurrir a ninguno de los actos. Y por otro lado, la movilización de la Asamblea Popular, creada a comienzos del 2006 para unir a los sectores de izquierda disconformes con las políticas del gobierno frenteamplista, y que había tenido un importante protagonismo en la mencionada marcha anti Bush, en tanto núcleo central de la Coordinadora Antiimperialista. El impulso de estos sectores opositores fue tal que a partir de ese 19 de junio se inició una campaña de recolección de firmas para reformar la constitución y convocar a otro plebiscito que permitiera derogar el resultado del plebiscito de 1989, que sancionó la amnistía para aquellos que violaron los derechos humanos durante la dictadura.

Finalmente, esta serie de manifestaciones callejeras y de utilización del espacio público para la expresión de demandas que caracterizó al año

2007, tuvo su culminación en los meses de noviembre y diciembre cuando los vecinos de la Villa del Cerro, tradicional zona obrera de Montevideo, se movilizaron para exponer ante las autoridades la necesidad de ser consultados sobre el destino del ex Frigorífico Nacional, creado en 1928 y cerrado por la dictadura militar en 1978. Ante las autoridades del gobierno frenteamplista, los vecinos insistieron que el Estado tenía que comprometerse a desarrollar un proyecto productivo en el ex Frigorífico Nacional con el consenso y la participación de las organizaciones locales (Red Intersocial Oeste, 2008). Estas nuevas y recientes manifestaciones de descontento social expresadas en las calles y espacios públicos de Montevideo, similares a otras ocurridas en el país en el último año, como tomas de tierras fiscales que grupos sociales autoconvocados han realizado en Bella Unión (Departamento de Artigas) y Kiyú (Departamento de San José) para desarrollar emprendimientos productivos, son el objeto central de análisis del presente capítulo.

¿Qué había detrás de estos fenómenos sociales que parecían no responder a la ordenada tradición uruguaya de hacer política bajo la conducción de los partidos y el Estado? ¿Expresaban algún cambio o giro en la sociedad y la política uruguaya? ¿Los partidos políticos, la central sindical, las multinacionales, el propio Estado estaban siendo cuestionados por sujetos sociales que parecían moverse autónomamente?

Hasta aquí a los académicos les ha parecido suficiente con caracterizar la política uruguaya como siguiendo un patrón estatista y partidocéntrico que ya no se ajusta a la escena y a los protagonistas de la época post-batllista en que vivimos, y mucho menos permite entender las multitudinarias movilizaciones callejeras que hemos reseñado, convocadas al margen de la voluntad de las organizaciones partidarias.

Nuestra hipótesis es que la revitalización de los movimientos populares se relaciona estrechamente con la existencia de un Estado uruguayo que solo da una respuesta parcial a las demandas más urgentes de vastos sectores sociales, y por ende, la dinámica de los sujetos busca satisfacer las mismas desenvolviéndose autónomamente de los partidos políticos, especialmente respecto al Frente Amplio. Pero nuestra hipótesis va más allá. Aceptando que hay una crisis en el Estado y el sistema de partidos, sostenemos que dicha crisis tiene efectos complejos y diferenciales sobre los movimientos sociales y sus capacidades de acción. En otras palabras, la retirada del Estado y la crisis de representatividad de los partidos políticos, y en especial, del Frente Amplio como coalición tradicional de la izquierda uruguaya, parece plantear a los movimientos sociales una serie de oportunidades que facilitan a unos,

y condicionan a otros, sus posibilidades de desarrollo futuro (cfr. TARROW, 1999).

El contexto

Durante las últimas cuatro décadas en Uruguay, coherentemente con las transformaciones ocurridas en el mundo, diversos aspectos del Estado social formado en las primeras décadas del siglo XX bajo el liderazgo de José Batlle y Ordoñez han tendido a desaparecer o vaciarse de contenido. Definido a grandes rasgos, el proceso comprendió la implementación gradual de tres tipos de reformas estructurales. En primer lugar, la reforma del sector público a través de privatizaciones y tercerizaciones. En los hechos esto significó que la satisfacción de las necesidades básicas de la población se fue retirando de la órbita estatal. En segundo lugar, las reformas del sector externo que tendieron a la liberalización de precios y la desregulación de los mercados, acompañadas del ajuste a nivel macro de la economía nacional con el objetivo de hacerla más competitiva en el concierto internacional. Esto significó abandonar todo vestigio del modelo de sustitución de importaciones en pos de otro basado en el comercio exterior. Por último, la implementación de una reforma del mercado de trabajo sobre la base de la desregulación del mismo y la suspensión de las negociaciones colectivas. Esto implicó una reestructuración productiva que se reflejó en una caída del diez por ciento de la participación del agro y la industria en el PBI y un aumento de la dependencia del capital financiero (BITTENCOURT, 2006). Desde el punto de vista social la consecuencia de este ciclo reformista fue que el Uruguay dejó atrás la mesocracia, para mostrar “signos inequívocos de desigualdad creciente”, erosionándose la integración y la cohesión social, hasta llegar “a la segregación cultural que separa más y más a las clases populares, medias y altas” (PNUD, 1999). Desde el punto de vista político, la fase neoliberal post-batllista se caracterizó por el predominio de la competencia electoral y el compromiso sobre el conflicto violento y global, aunque acompañado de un proceso de decadencia del Parlamento y de los partidos políticos. En estos resquicios que los cambios y la crisis política-estatal y social han provocado en la estructura tradicional del Uruguay, surgieron ventanas de oportunidades para que (re)tomaran su lugar en el escenario público antiguos y nuevos actores sociales.

Los movimientos sociales desde finales de la dictadura hasta nuestros días

Desde los últimos meses de la dictadura hasta nuestros días, el desarrollo de los movimientos sociales en Uruguay atravesó tres etapas. En la primera, que se extendió desde los últimos meses de 1984 hasta comienzos de los años noventa, los movimientos sociales vivieron el auge propio de la recuperación del régimen democrático luego de años de represión dictatorial. En la segunda, los movimientos sociales, después de la victoria en el plebiscito de 1992 que impidió las privatizaciones de las empresas públicas, paradójicamente entraron en un largo letargo, al mismo tiempo que la ofensiva neoliberal se manifestaba en otros campos de la acción estatal con las denominadas *tercerizaciones* impulsadas por el gobierno de Luis Alberto Lacalle. La tercera, iniciada entre 2002 y 2005 transcurre actualmente y en ella ha habido un nuevo impulso de la actividad de los movimientos sociales. Veamos con detalle cada una de estas etapas.

Del bloque democrático al bloque progresista

En 1984 la transición a la democracia fue impulsada por un heterogéneo bloque opositor a la dictadura donde convergieron partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales. Entre estos movimientos sociales se encontraban los de más importancia en aquel momento, esto es, la flamante central obrera PIT-CNT que articulaba la tradición de los años sesenta con la nueva generación de sindicalistas, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas de Ayuda Mutua (FUCVAM) fundada en 1970, y los movimientos de derechos humanos entre los que se encontraba el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fundado en 1981. Junto a ellos, compartieron el espacio público otros actores sociales de reciente creación, como los que se movilizaron tras la demanda de solución a la crisis de vivienda, a través de tomas de tierra y el establecimiento de asentamientos irregulares. En esta primera fase, los movimientos sociales se unificaron en torno al reclamo de verdad y justicia sobre el tema de los desaparecidos. Esto implicó un rechazo a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado promulgada en diciembre de 1986 durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990),

que significaba suspender definitivamente toda posibilidad de juzgar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los movimientos sociales impulsaron la derogación de la Ley de Caducidad, pero el triunfo de la opción oficialista en el plebiscito de abril de 1989, sumado a que los partidos políticos ya reorganizados volvieron a ocupar paulatinamente el centro de la escena pública, marcó el inicio de una fase declinante en el papel y el accionar de los mismos.

En los años noventa, tanto FUCVAM como SERPAJ y demás organizaciones de derechos humanos trataron sin éxito que los sucesivos gobiernos de Lacalle (1990-1995), Sanguinetti (1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005) cumplieran con el artículo 4° de la Ley de Caducidad que preveía la investigación de los hechos de desaparición de personas. Al mismo tiempo, enmarcaron su estrategia subordinándose a la del FA en su largo trayecto hacia el poder. De esta manera, el bloque democrático opositor a la dictadura, que integraban todos los partidos políticos y movimientos sociales, con el gobierno de los partidos tradicionales Colorado y Blanco se transformó en un bloque progresista opositor al neoliberalismo. A partir de la crisis del año 2002, los movimientos sociales conocieron un nuevo auge, y con la llegada al gobierno del Frente Amplio, esta revitalización se desarrolló en un escenario de crisis de su alianza con la coalición de izquierda.

Oficialistas y opositores

La división del bloque progresista entre oficialistas y opositores fue uno de los fenómenos que caracterizó la gestión del gobierno del Frente Amplio. Los oficialistas consideraron que el gobierno frenteamplista realizó las cosas dentro del límite de lo posible, que los problemas fueron enfrentados con las máximas capacidades disponibles, y que si bien será necesario profundizar las reformas o acelerar el paso en una segunda administración, en el rumbo general de las políticas no será necesario introducir ningún cambio sustancial. Los opositores, por su parte, criticaron el gradualismo de la gestión frenteamplista considerándola una traición a las máximas programáticas que señalan la necesidad de impulsar, desde un gobierno de izquierda, medidas de cambio radical. Mientras el gobierno consideró adecuado su modelo de desarrollo basado en una coyuntura favorable de precios para los productos agro exportables, la oposición progresista, aunque existieron muchas

diferencias de énfasis que veremos más adelante, consideró que este modelo significaba consolidar la dependencia del Uruguay respecto a los países desarrollados, y que en realidad el gobierno frenteamplista continuaba la línea de acción de sus predecesores, los partidos tradicionales. En síntesis, el oficialismo se consideró representante de una línea moderna de la izquierda, emparentada con la socialdemocracia y la tercera vía europea, mientras que en la vereda de enfrente, los actores se reivindicaron representantes de la izquierda tradicional o de una nueva izquierda radical, y denunciaron al gobierno por neoliberal.

Sobre la evolución futura de esta división entre oficialistas y opositores también existieron perspectivas divergentes. Desde el gobierno frenteamplista se vio a la política en Uruguay como una política de bloques, por un lado el bloque progresista (integrado como en los noventa por el Frente Amplio, la central sindical PIT CNT y los movimientos sociales) y por otro lado el bloque conservador (integrado por los partidos tradicionales y las cámaras empresariales) y se creyó que, a medida que se acercara el momento electoral, las diferencias al interior del bloque progresista se minimizarían frente a las que se tienen en la competencia con el bloque conservador. Por su parte, la oposición radical sostuvo que en la medida que el gobierno no cambiara el rumbo, se iría generando una escisión permanente de sus fuerzas políticas y sociales, y el Frente Amplio perdería su carácter de coalición unitaria de la izquierda uruguaya (algo de ello ha comenzado a ocurrir con el retiro del 26 de Marzo, grupo fundador del Frente Amplio, a comienzos de 2008).

Esta caracterización del bloque progresista que accedió al gobierno con el triunfo electoral del 2005 y su paulatina escisión en oficialistas y opositores, tuvo dos grandes consecuencias para los movimientos sociales. En primer lugar, la fractura interna del Frente Amplio se trasladó a los movimientos que integraban el bloque progresista. Por ejemplo, el debate entre oficialistas y opositores atravesó gran parte de la actividad del PIT CNT que, entre 2007 y 2009, decidió como tal mantener un apoyo crítico al gobierno, como mejor manera de sintetizar las correlaciones de fuerzas internas levemente superiores del oficialismo. Otros movimientos fueron ubicándose en uno u otro campo, con mayor o menor nitidez en las definiciones, permaneciendo muchos de ellos en la inasible frontera de las posiciones intermedias. Claramente, en la medida que la tradición de lucha en común, dentro del bloque democrático primero y progresista después, sobrevivió y mantuvo su peso, la lógica de la confrontación interna fue subordinada a la lucha frente al bloque conservador, y las posibilidades para una fuga hacia la izquierda

de grupos políticos y movimientos sociales opositores se vieron seriamente afectadas.

Sujetos en conflicto

Transcurrido el período del primer gobierno del Frente Amplio, es posible identificar, entonces, tres tipos de escenarios en el mapa de los movimientos sociales en el Uruguay actual, cada uno con sus actores y conflictos específicos.

El gobierno frenteamplista y la Asamblea Popular

La coalición se mantuvo unida con el objetivo de ganar las elecciones nacionales de 2009, pero una vez en el gobierno las diferencias internas entre radicales y moderados se hicieron insalvables. De esta manera, en abril de 2006 nació la Asamblea Popular, un conglomerado de veinte partidos y organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles que se presentó a sí mismo como una oposición de izquierda al carácter centrista del gobierno de Vázquez. El papel dominante en este colectivo de organizaciones lo tuvieron el 26 de Marzo y la Corriente de Izquierda. A comienzos de 2008, el 26 de Marzo rompió formalmente los lazos que lo unían al Frente Amplio y propuso a sus aliados que la Asamblea Popular se transformara en un nuevo partido político con el objetivo de lograr lugares en el Parlamento en las elecciones nacionales de octubre de 2009. La Corriente de Izquierda, luego de una reñida votación interna decidió no abandonar el Frente Amplio, lo que determinó que un numeroso grupo de dirigentes y militantes en abierto desacuerdo con la decisión adoptada pasaran a integrarse a la Asamblea Popular. Desde el punto de vista ideológico, esta nueva coalición se ubicó claramente dentro de la ortodoxia marxista de la izquierda uruguaya, se definió como anticapitalista y se propuso resistir al neoliberalismo con el objetivo de construir el socialismo. Al momento del auge de los movimientos populares del 2007 Jorge Zabalza, uno de sus líderes, declaró que el fracaso del gobierno estuvo en “no poder solucionar los problemas de las mayorías populares, pero no por falta de recursos o capacidad, sino por un compromiso con otro modelo de desarrollo indicado por los organismos

financieros internacionales, las multinacionales y las clases dominantes del Uruguay” (*Diario Página 12*, 18/11/2007).

El Estado y los vecinos organizados

Durante los últimos años, los movimientos de vecinos organizados han navegado en el término medio entre las ventanas de oportunidades que la crisis de los partidos y el Estado les abrió, y los obstáculos y condicionamientos que la misma les planteó. En esta situación encontramos una serie de movimientos autónomos de los partidos políticos y con una importante experiencia de autogestión, vinculados a asuntos locales y medio ambientales, tanto en el medio urbano como rural.

Sabido es que en Uruguay, a pesar de existir una importante presencia de la ciudadanía en organizaciones de la sociedad civil, son casi inexistentes las instancias de participación en las políticas públicas estatales, así como en el control y la rendición de cuentas de las instancias gubernamentales (Instituto de Comunicación y Desarrollo, 2006). En estos casos, la crítica que los movimientos de vecinos organizados hacen al accionar del Estado y el gobierno no significa que tengan un modelo alternativo de políticas, sino que se concentran en un paso previo: luchar por la construcción de espacios para la participación articulada con los actores estatales en la gestión pública.

El surgimiento de estos nuevos sujetos sociales estuvo en gran medida relacionado con la problemática de la retirada estatal de los procesos de protección social y el aumento de la pobreza y la marginalidad, originados por la implementación del modelo económico neoliberal. Y por tanto sus militantes de base se reclutaron en los barrios de la periferia montevideana y ciudades del interior, entre las personas que habían caído por debajo de la línea de pobreza fundamentalmente por una insuficiencia en el ingreso monetario. Dado que su emergencia, entonces, estuvo asociada al fenómeno coyuntural del desempleo, los vecinos organizados constituyeron un grupo heterogéneo con altos niveles de movilidad e incertidumbre, cuya situación dependió de los cambios en el ingreso, especialmente el salario (cfr. RAUS, 2003).

Uno de los grupos más importantes y activos de vecinos organizados lo constituyó la Red Intersocial Oeste que actuó (y actúa) en la zona del Cerro, uno de los tradicionales barrios obreros de Montevideo, hoy convertido en un cementerio de frigoríficos, fábricas y reservorio de desempleados. La

trayectoria de este movimiento de vecinos preocupados por asuntos locales tiene una década. Nació en 1998 en oposición al proyecto de la Secta Moon de instalar un puerto en las costas del barrio que dan al Río de la Plata, y llega hasta hoy cuando agrupa a diferentes organizaciones sociales como desocupados, ocupantes de tierras, vecinos contra las drogas, entre otros. El núcleo básico sigue siendo un grupo de vecinos que tienen como base ideológica declarada la oposición a los modelos de desarrollo capitalista salvaje y que, en 2005, cuando el Frente Amplio ascendió al gobierno, se radicalizaron en respuesta a lo que tempranamente visualizaron como una derechización del gobierno. En los comienzos, además de la oposición al proyecto de la Secta Moon, los vecinos se organizaron para atender demandas concretas y urgentes de los pobladores. En ese sentido, podríamos definirlos como una organización de autodefensa social, y en la búsqueda de satisfacer esas demandas comenzaron a presionar sobre los poderes públicos, como la Policía y la Intendencia de Montevideo. Luego de esa etapa inicial se pasó a otra, donde el carácter reactivo se complementó con propuestas en el plano de las metodologías participativas para las políticas públicas locales. Al momento del primer gobierno frenteamplista, como ejemplo de propuestas activas, estos movimientos de vecinos propusieron al Estado una elaboración conjunta de un proyecto a desarrollar en el predio del ex Frigorífico Nacional. En esta evolución comenzaron a trascender los límites del Cerro, para pasar al resto de la ciudad, e incluso el país, organizando encuentros con organizaciones similares en los departamentos de Artigas y Tacuarembó. Finalmente, ésta y otras propuestas de participación de los vecinos en las políticas públicas no tuvieron eco en el gobierno frenteamplista.

Las multinacionales y los ambientalistas

A nadie escapa que en Latinoamérica algunos gobiernos han perdido el control de sus economías, y los bancos y empresas transnacionales parecen haber encontrado la fórmula mágica de obtener beneficios: “capitalismo sin trabajo, más capitalismo sin impuestos” (BECK, 1998). Un caso paradigmático lo constituyó la instalación de plantas de celulosa en el Uruguay durante el primer gobierno frenteamplista. Con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, se formalizaron acuerdos que otorgaban ventajas impositivas a las empresas y que les permitían, por ejemplo, dar por finalizado el contrato e iniciar acciones legales contra el Estado por los motivos más inverosímiles

que entorpecieran el funcionamiento productivo. La dependencia hacia la creación de fuentes de trabajo temporales y la fragilidad del Estado uruguayo, permitieron que las multinacionales tomaran para sí un papel importante en la satisfacción del bienestar social de la población. Frente a ello, la mayor parte de los actores locales aceptaron esta realidad, mientras que unos pocos intentaron oponerse y transformarla (cfr. MOREIRA, 1998). El papel de oposición a las multinacionales dedicadas a la producción de celulosa quedó en manos de los grupos ambientalistas nacionales. La historia reciente del movimiento ambientalista presenta tres etapas claramente diferenciadas.

En la primera, en los ochenta y noventa, el ambientalismo nació como movimiento de autodefensa, basado en una visión conservacionista que se opuso a la construcción del Canal Andreoni y su impacto en los bañados de Rocha. En esta etapa fundacional los grupos ambientalistas se nuclearon en la organización de segundo grado Red de Organizaciones No Gubernamentales (Red ONGs) y concurrieron masivamente a la Cumbre de Río en el año 2000. Los hitos más importante de esta etapa fueron la formación en 1996 del Grupo Movimiento por la Vida, el Trabajo, y el Desarrollo Sustentable (MOVITDES) de la localidad de Fray Bentos que logró frenar la instalación de la planta de celulosa Transpapel (VILLALBA, 2007), y la activa movilización de los vecinos de Sayago para impedir la instalación de una planta de pórtland en ese barrio de Montevideo. La segunda etapa comenzó al regreso de la citada Cumbre de Río, cuando un grupo de ambientalistas se orientó hacia la incorporación de perspectivas políticas y económicas sobre los modelos de desarrollo y se relacionó con el movimiento ambiental regional internacional, logrando la creación del movimiento Eco Tacuarembó que se opuso con éxito a la instalación de una central nuclear en la localidad de Paso de los Toros. Como consecuencia de esta nueva estrategia, la Red ONGs se dividió en dos sectores, uno tradicional, que continuó aferrado a las banderas conservacionistas y uno renovador, que incorporó los planteamientos políticos. Este último grupo fue liderado por Redes Amigos de la Tierra y la naciente Organización Guazubirá, e integrado además por Eco Tacuarembó y MOTVIDES, comenzando en conjunto una batalla contra el modelo forestal impulsado por los gobiernos de los partidos tradicionales y continuado por el gobierno frenteamplista. Esta etapa centrada en la oposición al modelo forestal fue nucleando nuevos aliados como los productores y vecinos de Libertad, en el departamento de San José, que protestaban por el funcionamiento de una planta de reciclaje de Cromo 6. El apogeo de movilización y legitimidad social se alcanzó en

el año 2004 cuando, contando con el apoyo de los movimientos sociales y sindicales como FUCVAM y PIT-CNT, se logró someter a referéndum la intención gubernamental de privatizar los servicios de agua, logrando un amplio respaldo ciudadano contra esa medida y obligando al gobierno a iniciar su administración ante un resultado consumado. Al asumir el gobierno frenteamplista, se inició la tercera etapa de la trayectoria histórica de estos movimientos, y los enemigos principales pasaron a ser las multinacionales de fabricación de pasta de celulosa, específicamente la Empresa Nacional de Celulosa España (ENCE) y la finlandesa Botnia. Las organizaciones ambientalistas uruguayas dieron el alerta a sus colegas argentinos de las asociaciones de defensa del Río Uruguay, y con el recrudecimiento del conflicto a partir del funcionamiento de Botnia en el 2007, el eje de la acción se trasladó de Uruguay a la ciudad argentina de Gualaguaychú. Esto produjo una nueva división entre los sectores renovadores del ambientalismo uruguayo, en un ala moderada y otra radical. La vertiente moderada, integrada básicamente por las organizaciones ambientalistas no gubernamentales más institucionalizadas, aspiró a convertirse en grupo de presión, manteniéndose autónoma de los partidos políticos. Su accionar pasó menos por la política en las calles y más por la política en las oficinas del Estado. Sus demandas específicas fueron incluidas en cuestionamientos globales sobre el modelo de desarrollo, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o las iniciativas gubernamentales de privatización de las empresas públicas que controlan recursos naturales, como el agua. Tuvo siempre una posición crítica hacia la Asamblea Ambientalista de Gualaguaychú, a la que cuestionó su utilización de los cortes de puentes y rutas como metodología de lucha. Por otra parte, creyó que la pérdida de legitimidad de los temas ambientales, la desmovilización de la militancia frenteamplista y el cierre de su acceso a las oficinas estatales, provocarían un estancamiento tal en la evolución de las organizaciones ambientales, que resultaría fatal para sus posibilidades de convertirse en referente de la sociedad uruguayo. Al final del primer gobierno frenteamplista se encontraba en una situación de transición y el futuro era un gran signo de interrogación.

Por su parte, las organizaciones ambientales que conformaron la vertiente radical, fueron aliadas de la Asamblea Ambiental de Gualaguaychú y en conjunto se integraron en la Asamblea Ambientalista Regional que realizó tres reuniones, a saber: la primera en Nueva Palmira, donde la empresa Botnia tiene el puerto de salida de su producción, la segunda en Tacuarembó en diciembre de 2007, y la tercera en Gualaguaychú en marzo

de 2008, sumándose a la misma organizaciones de Brasil y Paraguay. Las organizaciones uruguayas que son exponentes de esta vertiente ambientalista son los productores rurales de Cerro Alegre en Soriano y Mercedes, el MOVITDES de Fray Bentos, el sindicato de trabajadores de la forestación de Rivera, la Asamblea del Callejón de Montevideo, el Movimiento 10 de septiembre de 1815 de Tacuarembó (campesinos ocupantes de tierras en el departamento más forestado del Uruguay), y el Grupo Sierras de Rocha, entre otros. Estas organizaciones trataron de romper las fronteras y barreras nacionales con la apelación al acuífero guaraní como la región compartida por uruguayos, argentinos, paraguayos y brasileños.

En términos programáticos, los ambientalistas uruguayos (tanto moderados como radicales) consideraron que la instalación de las fábricas de celulosa en Uruguay provocaría un proceso de extranjerización de la tierra, sobreexplotación de la mano de obra y contaminación, y a diferencia de la Asamblea de Gualaguaychú que solicitó la relocalización de las plantas de celulosa, este movimiento pretendió que no hubiera ninguna planta de celulosa en Uruguay, dado los efectos negativos de la forestación sobre el agua, la tierra y el contexto social. Sin embargo, en Uruguay los argumentos de los ambientalistas contra el modelo de desarrollo forestal nunca fueron fruto de un debate nacional. La instalación de Botnia fue un hecho consumado, y con el corte desde el lado argentino, la defensa de las posiciones ambientalistas en Uruguay se ha visto deslegitimada ante la creciente ola de nacionalismo que impregnó el debate sobre el tema entre 2005 y 2009. Las organizaciones ambientalistas realizaron diversos pedidos de audiencia al presidente Vázquez, quien no les concedió ninguna, y entre los movimientos políticos y sociales analizados (partidos, vecinos, ambientalistas), en este contexto de un Estado mínimo y débil como el uruguayo, decidido a proteger las inversiones extranjeras a cualquier precio, las organizaciones ambientalistas uruguayas son las que más se han visto afectadas por la crisis de la matriz estatista y partidocéntrica.

Conclusiones

Durante la primera década del siglo XXI, América Latina estuvo atravesada por un auge de las movilizaciones sociales donde actores de orientación contrahegemónica buscaron expresar sus intereses, demandas y objetivos. En ese contexto, Uruguay fue un caso difícil de incorporar a los análisis, “toda

vez que se presenta como una sociedad poco proclive a la confrontación y la política de la calle, donde hasta el presente el papel de organizaciones populares y movimientos sociales ha sido opacado por el rol de los partidos políticos” (LÓPEZ MAYA y otros, 2007). Como hemos visto en este Capítulo, los movimientos sociales en Uruguay presentan algunas características que es necesario destacar.

En primer lugar, desde el nacimiento del Uruguay los partidos políticos y el Estado tuvieron un papel tan fundamental, que es posible afirmar que no ha existido hasta el momento una tradición destacable de movimientos sociales que hubieran podido controlar, vigilar u obstruir el accionar de los mismos. No significa esto que no hayan existido a lo largo del Siglo XX experiencias sociales de tipo político, si no que los movimientos han estado tan estrechamente vinculados a los aparatos partidarios que han funcionado como una suerte de brazo social de los partidos políticos. Fundamentalmente se puede decir que las representaciones de las dos grandes corrientes (obrero y estudiantil) que nacieron en la primera mitad del siglo pasado fueron abandonando la lucha eminentemente social para afianzarse, en mayor o menor medida y a partir de los años setenta, en torno a un proyecto partidario, proceso que desembocó en la fundación del Frente Amplio. Si nos concentramos en los últimos años, a la salida de la dictadura esos movimientos fueron conformando una trayectoria de cierta relevancia, a partir del bloque progresista que alcanzó su apogeo con el plebiscito de 1992, y que logró frenar la estrategia privatizadora del gobierno de Luis Alberto Lacalle, pero ciertamente no encontramos allí un movimiento social independiente, sino un actor que actuó nuevamente de manera dependiente de la estrategia político partidaria del Frente Amplio. En segundo lugar, resulta destacable que el movimiento social uruguayo optó, en esa y otras ocasiones, por la apelación a un formato institucional, a través de los recursos de plebiscitos y referéndums establecidos en la Constitución Nacional (cfr. FALERO & VERA, 2004), que independientemente de sus ventajas y desventajas, acentuó la dependencia de los movimientos sociales hacia los partidos políticos, al punto que hoy esos instrumentos constitucionales tienen pocas posibilidades de utilizarse o de salir triunfantes, porque el propio Frente Amplio como fuerza oficialista no los apoya, y no es un secreto para nadie el vínculo de las organizaciones sociales con la coalición de izquierda gobernante. En tercer lugar los líderes sociales están no sólo estrechamente imbricados al Estado y los partidos, siendo dependiente de ellos, al punto que la afirmación de la dirigente social argentina Milagro Sala que “los políticos

son los políticos, y los dirigentes sociales, son los dirigentes sociales” (*Diario Pagina 12*, 31/10/2009), en Uruguay es una frase de ficción. No extraña, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los representantes de la campaña por la nulidad de Ley de Caducidad desarrollada en vísperas de las elecciones de 2009, fuesen conocidos por su vinculación partidaria, por más que quisiesen operar desde otros roles. De la misma manera no puede sorprender que la lucha por implementar el voto epistolar, también derrotada al igual que la anterior en octubre de 2009, sin figuras o instituciones con peso partidario apoyando la iniciativa, haya quedado poco menos que en el anonimato. Es más, históricamente en Uruguay los grandes liderazgos sociales se han construido generalmente desde el Estado y los partidos políticos, es decir, desde el ejercicio del poder y no desde la oposición a él. En este Capítulo, hemos abordado la historia reciente de los movimientos sociales y populares en Uruguay en un contexto de consolidación de las tendencias de cambio estructural iniciadas hace tres décadas, esto es, el afianzamiento de la matriz agroexportadora con un crecimiento inédito de la desigualdad social, el retroceso de la capacidad estatal y una crisis de representatividad de los partidos, en especial del Frente Amplio como coalición de izquierda.

Hemos visto como al iniciarse la transición democrática en 1984, todos los partidos políticos y los movimientos sociales y populares estuvieron unidos en el bloque democrático opositor a la dictadura, y como para la década siguiente, con el desprendimiento de los partidos tradicionales Colorado y Blanco que pasaron a alternarse en el gobierno, el bloque democrático se transformó en un bloque progresista opositor al neoliberalismo. Finalmente con la llegada del Frente Amplio al poder, este bloque progresista a su vez comenzó a transitar una nueva fase, con la escisión entre oficialistas y opositores al gobierno frenteamplista. En este contexto de crisis estatal y partidaria, especialmente de la izquierda, la misma tuvo efectos complejos y diferenciales sobre los movimientos sociales y sus capacidades de acción, en tanto les planteó oportunidades de desarrollo a la vez que condicionó fuertemente las mismas. Por el lado de los efectos positivos el proceso de crítica y escisión de su propia coalición de las fuerzas opositoras más radicales, constituyó en conjunto un proceso que explica la revitalización de los movimientos sociales en los últimos años. Por el lado negativo, la crisis del modelo estatal desarrollista, así como la adopción de estrategias continuistas de las soluciones pro mercado por parte del gobierno frenteamplista, condicionaron su evolución, pues los marginaron de los escenarios de elaboración de las políticas públicas.

Referencias

BECK, Ulrich

(1998) *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Madrid: Editorial Paidós.

BITTENCOURT, Gustavo

(2006) "Uruguay 2006: desarrollo esquivo o ruptura con la historia". *América Latina hoy*. España: Universidad de Salamanca, n° 44, p. 15-39.

FALERO, Alfredo & VERA, Angel

(2004) "Transformaciones sociales y campo popular en Uruguay. Construcción de alternativas y escenarios posibles". En: BRANDO, Oscar (Comp.). *Uruguay hoy: paisaje después del 31 de octubre*. Montevideo: Ediciones del Caballo Perdido.

INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO

(2006) *Brillos e impurezas de un diamante: resultados del índice de la sociedad civil en Uruguay, 2006*. Disponible en: www.lasociedadcivil.org. Consulta realizada en 10 de septiembre de 2009.

LOPEZ MAYA, Margarita; IÑIGO CARRERA, Nicolás & CALVEIRO, Pilar

(2007) "Política de calle y contrahegemonía". En: ____ (Comp.). *Luchas contra hegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

MOREIRA, Carlos

(2010) *Apuntes sobre el primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005-2010)*. Buenos Aires: Editorial El Grillo.

MOREIRA, Constanza Beatriz

(1998) "Modernización, reforma del estado y consolidación democrática: el Uruguay en el contexto de las 'nuevas democracias'". *Documento de trabajo n° 12*. Montevideo: Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

PNUD

(1999) *Informe sobre desarrollo humano*. Montevideo. Disponible en: www.undp.org.uy. Consulta realizada en 01 de julio de 2009.

RAUS, Diego

(2003) "Transformaciones sociales y gobernabilidad política en América Latina y Argentina". *Cuaderno n° 2*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Lanús.

RED INTERSOCIAL OESTE

(2008) *El frigorífico nacional y el Uruguay productivo*. Montevideo: Red Intersocial Oeste/Universidad de la República/PIT-CNT/FLACSO Uruguay.

TARROW, Sidney

(1999) "Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales". En: McADAM, Dough; McCARTHY, John & ZALD, Mayer. (Eds.) *Movimientos sociales, perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo.

VILLALBA, Delia

(2007) *Haciendo camino*. Montevideo: El Tomate Verde Ediciones y Redes Amigos de la Tierra.

Recebido em

abril de 2010

Aprovado em

janeiro de 2011